

CAPÍTULO I

RELACIONES DE DOMINACIÓN SOCIAL ARGENTINA: LA DESIGUALDAD SOCIAL

UNA VÍA PARA PENSAR la nueva sociedad argentina consiste en analizar el vertiginoso proceso de movilidad social descendente que la atravesó durante las tres últimas décadas. Si bien el crecimiento de la desigualdad es parte constitutiva de la dinámica del capitalismo actual, este proceso cobra particular significación en la Argentina, ya que nuestro país se caracterizó por lo contrario, por un proceso peculiar y sostenido de movilidad social ascendente (Feijóo, 1993; 2001; Delich, 2002).

Acerca de esta cuestión, el documento escrito por el economista Claudio Lozano, director del IDEP-CTA (2001), ofrece una serie de elementos que nos permiten analizar las características del proceso económico argentino de los últimos 25 años en el marco de determinadas relaciones de dominación social. Para Lozano, la inauguración de un tipo de política económica inédita en nuestro país se puede entender en el marco del proyecto de construcción de un orden social sostenido por un nuevo bloque de poder. De esta manera, el proceso de creciente desigualdad de distribución del ingreso no sería una consecuencia no deseada del modelo económico sino, por el contrario, el eje de construcción de un nuevo orden dominante, en el cual justamente los sectores medios son reducidos por su potencial capacidad política y contestataria a la luz de los antecedentes políticos de los años veinte, sesenta y setenta en la Argentina⁶. Lozano afirma en dicho documento:

⁶ Esta mirada sobre las causas de la dictadura y sobre el papel contestatario que tuvieron los sectores medios en diversas coyunturas políticas permite entender, por un lado,

El discurso enarbolado por el neoliberalismo en la voz de su mentor inicial (Martínez de Hoz, ministro de Economía de la Dictadura) quien decía que con menos Estado y con más mercado Argentina describiría un ciclo virtuoso de inversión-crecimiento-mayor empleo y mejor nivel de ingreso, exhibe hoy su más absoluta y flagrante contradicción con la evidencia empírica. Nuestro país exhibe a veinticinco años de aquella afirmación un cuadro donde la tasa de inversión medida en relación al PBI es inferior a la vigente en 1975; el PBI per cápita es 8% menor al de aquel año, la tasa de desocupación registra niveles que multiplican por cinco los vigentes en 1975 y el salario promedio revela una caída en términos reales de aproximadamente un 60%. En el marco descripto, que corresponde exponer para dimensionar la magnitud de la crisis vigente, se observa un crecimiento de un 600% de los niveles de pobreza en nuestro país. Más aún, y a los efectos de ser más explícitos, los efectos del ciclo largo de vigencia neoliberal en la Argentina se perciben al observar que este país tenía en 1975 unos 22 millones de habitantes y 2 millones de pobres. Hoy, tiene 37 millones de habitantes y 14 millones de pobres (datos a octubre de 2001). Es decir, que de los 15 millones que explican el incremento poblacional del último cuarto de siglo, 15 millones cayeron bajo la línea de la pobreza (Lozano, 2001: 13).

Para este economista, el golpe militar de marzo de 1976 permitió el predominio de la inversión financiera, con desindustrialización, desempleo y fuerte caída de los ingresos. Las consecuencias de esta política lo llevan a afirmar que los indicadores sociales y económicos actuales constituyen una “estrategia de la desigualdad” que vulnera, una y otra vez, el nivel de vida de la población. En términos relativos, la Argentina es dentro de América Latina el país que más se empobreció.

En la mitad de la “década de los setenta” –mirada a la distancia, hoy parece un paraíso perdido– los asalariados participaban en un 43% de la torta total de ingresos, y si retrocedemos aún más, en 1949 recibían casi el 50%.

En la misma línea de análisis sobre las causas de la existencia de un nuevo orden social sobre la base de nuevas relaciones de dominación, podemos citar los recientes trabajos de Basualdo (2000; 2001) y los artículos que aparecen periódicamente en *Le Monde diplomatique* (versión en español) acerca del impacto transformatorio de las relaciones económicas constitutivas de la sociedad argentina que se generaron

el fundamento del modelo económico que tendió a pulverizar a los sectores medios, pero también el comportamiento de los sectores medios en los acontecimientos de diciembre y hacer una lectura más política y diferente de la que hicieron los medios, que la encauzaron fijando la práctica de los “cacerolazos” como una reacción defensiva.

a partir de la última dictadura militar en 1976. En ellos se señala cuánto fueron profundizadas estas relaciones de nuevo tipo –fundadas en la valorización financiera– durante la vigencia del nuevo sistema democrático que existe en Argentina desde 1983, conclusión a la que se arriba luego de analizar los datos macroeconómicos y de crecimiento de la pobreza en la Argentina, lo cual no deja de generarnos mucho dolor frente al entusiasmo vivido en esos años.

En un artículo periodístico⁷ Lozano afirma:

Entre 1983-1989, primera etapa democrática, se observa también una gran caída de los ingresos bajos y medios. Los ingresos bajos cayeron un 25%; los medios, un 17%; pero los altos crecen un 21%. El 20% más rico, tanto entre 1974 y 1983, como entre 1983 y 1989, aumenta su cuota en la apropiación del ingreso. En el período 1990-1994 –con el crecimiento de la economía, bajo las nuevas formas de apertura, desregulación y privatizaciones– el 40% de los sectores más bajos de la población no sólo aumenta sus ingresos sino que pierde un 4,1% de ellos. Esto demuestra que, bajo este modelo neoliberal, aunque haya expansión de la economía, los sectores más pobres ni se enteran (Lozano, 2002).

Según la consultora Equis –que se apoya en trabajos del INDEC y del Ministerio de Economía–, bajo el período neoliberal se estructuró este presente: el 10% más pobre (casi 5,5 millones de personas) vive con apenas 3 pesos por día, y el 10% más rico (2,4 millones) vive con 95 pesos diarios. Si tenemos en cuenta que estos resultados fueron elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de mayo de 2001, tenemos que pensar que en la actualidad la brecha es mucho más grande.

También García Delgado (*Clarín*, 2002), argumentando sobre esta cuestión, afirma que la Argentina tiene la peor desigualdad de ingresos desde que el INDEC comenzó a llevar sus registros en 1974. En la actualidad, el 10% más rico de la población de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires gana 26,4 veces más que el 10% más pobre. El año anterior, esa brecha era de 24,8 veces. En los años setenta, en cambio, era de apenas doce veces. Para comprender mejor los números, podemos decir que el 10% más pobre, más de medio millón de personas, es la gente que gana entre 5 y 145 pesos por mes; y el 10% más rico son aquellos que ganan entre 1.330 y 16.000 pesos mensuales. El 10% más rico de la población de la Capital y el Gran Buenos Aires recibió el 36,90% de los ingresos totales, y el 10% más pobre, apenas el 1,4.

⁷ *Clarín*, 26 de julio de 2002.

Si se considera una franja más amplia surge que el 20% más rico se quedó con el 53,1%, y el 20% más pobre con el 4,1. Esto significa que de cada diez personas, dos ganan más que las ocho restantes juntas. Hay que pensar, además, que el 80% de los habitantes porteños y del conurbano ganan menos de 850 pesos por mes. Delgado explica:

Se trata de una estructura de ingresos similar a la brasileña o colombiana. En los países capitalistas desarrollados, la brecha es muchísimo menor. En Noruega, Suecia o Bélgica, por citar tres ejemplos, el 10% más rico gana cinco veces más que el 10% más pobre (*Clarín*, 2002).

Otro dato que revela la continuidad del modelo económico excluyente es la persistencia de la expansión económica del 20% más rico. ¿Quiénes componen este 20% de ricos? Estamos hablando de 6 millones de personas, pero con una tendencia que hace que una parte muy sustantiva se concentre en el primer 10%: 3.700.000. Estos serían los ganadores, que deben tener un ingreso por hogar que no menor a 16 mil dólares mensuales, aunque algunos pueden ganar mucho más.

Para García Delgado, la Argentina de estos últimos años es un enorme laboratorio social:

Se está desclazando a la sociedad más igualitaria de Latinoamérica [y] en cada decisión económica que se toma está en juego esta distribución [...] La vieja cuestión social siempre había sido capital versus trabajo y la amenaza estaba representada únicamente por la huelga y la revolución. Esta amenaza llevó al llamado Estado de Bienestar [...] Pero desde la década del setenta hay una nueva cuestión social: la concentración de capitales financieros y la aldea global versus el bloque de sectores productivos y sociales que se ven expropiados. Hay una alta conflictividad de bloques sociales a nivel nacional y global. Hasta ahora, no se había logrado generar un sentido de amenaza con una visión de sociedad civil no política (*Clarín*, 2002).

Lo trágico del gobierno de la Alianza es precisamente –como señalan tanto los informes de la CTA, el economista Basualdo y el reciente libro de Fradkin– la forma en que un gobierno que se presentó como alternativa política al menemismo continuó a través de sus políticas económicas la estrategia de la desigualdad. Fradkin (2002) recurre a una frase del periodista Horacio Verbistky: “Hood Robin”, con la cual se propone denunciar la política económica adoptada en los noventa: un Estado que roba a los pobres para darle a los ricos.

La pregunta que surge a nivel político y social es: ¿cómo fue posible este vaciamiento y debilitamiento social a lo largo de más de 25 años? Siguiendo el concepto formulado por Lozano para dar cuenta de la existencia de nuevas relaciones de dominación, “estrategia de la desigualdad”, este trabajo se abocará a un análisis ideológico de cómo

un orden social es construido, proceso en el cual los medios de comunicación junto con otras instituciones cumplen un papel significativo. De allí que nos parece productivo para encarar nuestros interrogantes el enfoque gramsciano del economista Basualdo (2001). Allí se hace referencia, y esto nos interesa de particular manera, al papel de los intelectuales orgánicos en la conformación de un orden hegemónico en la sociedad argentina.

Todo parece indicar que, agotada la represión e interrumpida la industrialización sustitutiva, la opción de los sectores dominantes fue avanzar en la redefinición del sistema político y de la sociedad civil mediante una estrategia negativa que continúa la tarea dictatorial, a través de otros medios [...] Este parece el motivo por el cual, a lo largo de las últimas décadas, son cooptados cuadros políticos, dirigentes sindicales, etc., que conservan e incluso en algunos casos fortalecen sus liderazgos debido al respaldo que encuentran en los sectores de poder. Sin embargo de allí en más, la tarea central de estos intelectuales orgánicos consiste en la desmovilización y la desestructuración de quienes supuestamente representan (Basualdo, 2001: 16)⁸.

Nos interesa situar en esta línea el rol de los periodistas en la formación de una trama cultural e imaginaria que consolida el orden social y político promovido desde el poder, como así también perfilar discursos que suponen otra racionalidad, cuya trama cultural habrá que develar. Sin desmerecer la importancia que tuvo la llegada del sistema democrático, el fenómeno de la distribución regresiva del ingreso que se pone en marcha en 1976 no se modifica esencialmente en los años ochenta, y es fundamente durante los noventa cuando este proceso se consolida con el crecimiento del desempleo, que actúa como mecanismo disciplinador. El modelo de valorización financiera es acompañado por el surgimiento de negocios comunes entre los sectores dominantes y el sistema político a costa de los intereses públicos. De este modo, la corrupción queda instalada como parte inherente al funcionamiento del proceso concentracionario de capital en la Argentina (Basualdo, 2001: 25). Asimismo es importante destacar cómo esta articulación limita la capacidad de acción de la política, generando una falta crónica de alternativas que integren las necesidades y aspiraciones de los sectores populares, produciendo en el largo plazo una creciente ilegitimidad del sistema político en su conjunto (Basualdo, 2001: 27). En el Cuadro 1 del Anexo se puede apreciar el ciclo económico-social que antecede al

⁸ Basualdo se basa en el concepto de transformismo, planteado por Gramsci, con el cual intenta manifestar cómo los sectores dominantes excluyen todo compromiso con las clases subalternas, pero mantienen la dominación –governabilidad– sobre la base de la integración de las conducciones políticas de esas clases subalternas.

estallido de fines de diciembre de 2001, que nos permite tener un panorama totalizador de las dimensiones sociales, económicas y políticas de la crisis y de las aristas de nuestro problema.

LA CAÍDA DE LOS SECTORES MEDIOS, EL CRECIMIENTO DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA

Para comprender empíricamente la construcción de un país profundamente desigual, liderado por un gobierno y un sistema político sumidos en una creciente ilegitimidad, vamos a presentar la dinámica social involutiva de nuestro país. Nos proponemos describir, con datos producidos por consultoras, informaciones de la prensa gráfica, estudios estadísticos y diversas publicaciones que circulan en la web, las características de la estructura social argentina actual, la dimensión de los sectores medios actuales y los sectores populares, así como también evaluar el modo en que se manifiesta el desempleo. Esto último, como se verá después en los programas televisivos y en el trabajo empírico con los sujetos sociales, cobra una importancia y una gravedad inusitadas en términos de nuevos imaginarios sociales.

Compartimos con Feijóo (2001: 2) que, como resultado de procesos sociales y económicos de mediano y largo plazo, se ha configurado una nueva estructura social en la Argentina. Esto es, un nuevo país, una nueva pobreza, una mutación de los actores sociales históricos y del tipo de relaciones colectivas, individuales, macro y micro-cotidianas que configuran una sociedad muy distinta de aquella de hace 30 o 40 años. “Ni a la opinión pública ni a los medios de comunicación de masas les resulta fácil interpretar esta nueva realidad”, afirma acertadamente Feijóo (2001: 47). En relación a los grupos sociales, sus rasgos más llamativos son la persistencia y profundización de la pobreza de la población en general y de algunos grupos específicos de edad, como es el caso de los jóvenes y de la tercera edad, como lo corroboran los datos que mostramos luego.

En el proceso de crecimiento de la desigualdad social se observan varios fenómenos, la caída estrepitosa de los sectores medios, y su transformación en una categoría que los sociólogos han dado en llamar *nuevos pobres*, y el crecimiento de la pobreza y la indigencia.

El fenómeno de transformación de la clase media no comenzó recientemente. Si bien a nivel público sus dificultades aparecen asociadas con medidas económicas recientes como el “corralito” primero, la pesificación y la devaluación después, la crisis comienza hace casi tres décadas, según hemos planteado anteriormente⁹. Esta crisis social

⁹ Con el llamado *Rodrigazo* y con la política económica de Martínez de Hoz (políticas que suponen el comienzo de la aplicación del recetario neoliberal en la Argentina) se alienta la

aparece retratada en alguna bibliografía de comienzos del sistema democrático, a partir de investigaciones promovidas por el INDEC que daban cuenta del crecimiento de la pobreza en la Argentina, difundándose un nuevo indicador para la medición de la pobreza: el concepto de necesidades básicas insatisfechas. Durante el gobierno de Alfonsín se reconoce el incremento de las personas indigentes por el impacto que ha tenido en la clase trabajadora la destrucción de la industria nacional y la paulatina disminución de sectores trabajadores asalariados¹⁰. Este proceso, que se pone entre paréntesis en los primeros años de la transición democrática, se agudiza durante los años noventa.

Como diversos autores se encargan de señalar (Svampa, 2001; Minujin y Kessler, 1994; Arizaga, 2000), en estos años se produce una fragmentación de los sectores medios, con una parte que resulta favorecida por las políticas económicas fundadas en el modelo de la convertibilidad, ya sea a través de la participación en procesos económicos vinculados a las políticas de privatizaciones o por la rentabilidad financiera. La otra parte, por un lado, se tornó vulnerable como consecuencia de la Ley de Reforma del Estado, que durante los años noventa produjo un congelamiento de los salarios a nivel estatal y una retracción del empleo público en general; y, por otro lado, por la flexibilización del mercado de trabajo, que ocasionó un proceso de inestabilidad creciente del empleo, transformando en forma paulatina prácticas arraigadas de la histórica clase media argentina. Si bien hubo sectores de la clase media que vivieron los años noventa como una posibilidad de acceso al consumo, esto fue posible en el marco del crecimiento del desempleo y la precariedad laboral (Cuadro 2).

Cierta bonanza que hubo en el primer lustro de los noventa se debió, según analistas económicos, a la llegada de un caudal cuantioso de capitales derivados de las privatizaciones de empresas estatales, y también al crecimiento del denominado sector servicios, proceso que comenzó a entrar en crisis a mediados de los noventa y con mayor profundidad con el denominado “efecto tequila”.

destrucción de la industria nacional, de la pequeña y mediana empresa, se abre la economía a la importación de productos de todo tipo. Argentina deja de ser un país que produce. En ese contexto cambia la dinámica del mercado de trabajo, dado el incremento del sector servicios y el sector financiero, proceso que se acentúa radicalmente durante los noventa, con las privatizaciones, la reducción del Estado y los límites del crecimiento de la economía en el primer lustro de los noventa. Si bien los sectores medios pudieron usufructuar un cierto bienestar a partir del bajo costo del dólar, que les permitió la incorporación de nuevas tecnologías hogareñas, la accesibilidad de viajes al exterior y el crédito, fueron colocados a expensas de un proceso de valorización financiera de corto plazo, sumiéndolos en la actualidad en un deterioro del poder adquisitivo que no logra revertirse.

10 Podemos recordar de esa época el reparto de la “caja PAN” (Plan Alimentario Nacional).

A pesar de que esta sociedad se presenta a sí misma como una sociedad de clases medias, no son demasiados los estudios realizados en ese sentido. La crisis de los sectores medios comenzó a ser pensada sistemáticamente en diversos seminarios que se hicieron en los primeros años de los noventa¹¹. En 1992 aparece un libro titulado *Cuesta abajo*, y en 1994 el trabajo de Alberto Minujin y Gabriel Kessler sobre *La nueva pobreza en la Argentina*. En ambos comienza a definirse una nueva categoría social para abordar sectores sociales que históricamente han accedido a la vivienda, a la educación y a vacaciones pagas, a vivir en barrios con todos los servicios básicos (agua, electricidad, teléfono y transporte), a los que el crecimiento del desempleo y la caída del poder adquisitivo del salario iban colocando en un estándar de vida cada vez más cercano a los pobres estructurales, los cuales no habían crecido, al menos durante los primeros años noventa (Cuadro 3).

Podemos hablar entonces de dos procesos sociales estructurales, la transformación de la Argentina en un país cada vez más segmentado y polarizado y un proceso creciente de movilización social descendente con la emergencia de un grupo social a quienes se denomina nuevos pobres. Los pobres de nueva categoría, entonces, son pobres de ingresos, pero generalmente tienen un nivel educativo más alto que los pobres estructurales y una experiencia de vida diferente, un capital social acumulado que les permite operar con el mundo de manera diferente. Así, junto con el crecimiento de los nuevos pobres se va constituyendo también un nuevo sector social, llamado los nuevos ricos, quienes se manifiestan espacialmente en un fenómeno también nuevo que son los *countries* y barrios cerrados¹².

Según las estadísticas, estos procesos de polarización se agudizan entre el año 2000 y 2001 y continúan a lo largo de 2002. En esos años se manifiesta un importante enriquecimiento de los estratos más altos, produciendo en esa traslación de ingresos un crecimiento del empobre-

11 La emergencia de este fenómeno es de tal magnitud que, curiosamente, en un país imaginado como de clases medias, el tema ha tenido escasa relevancia y poca investigación empírica desde el plano de la investigación en ciencias sociales. Podemos señalar que recién en la última década se está generando conocimiento sobre estas clases y su dinámica social, política, histórica y cultural más allá del género ensayo, que sí se había interesado por su importante presencia en la Argentina.

12 Obviamente, el crecimiento de la fracción de los sectores medios que ascendió socialmente no tuvo la misma magnitud que el crecimiento exponencial de los nuevos pobres. De todos modos me parece importante mencionarlo en relación a esta idea de segmentación de la sociedad argentina y también de cambios culturales, ya que la suburbanización de estos sectores medios que se enriquecieron va asociada a la generación de estilos de vida que rompen con la idea de una ciudad cosmopolita y europea, más próxima a un estilo de vida americano. Ver Arizaga (2000).

cimiento de sectores sociales que habiendo formado parte de los sectores medios habían comenzado a caer por debajo de la línea de pobreza.

A pesar de lo engorroso que resultan ser los números, me parece importante mostrar cómo la Argentina se encontraba a merced de los grandes poderes económicos que incidían en la profundización de la desigualdad día a día. Más recientemente, la prensa escrita tanto nacional como internacional durante 2000 y 2001 elaboró numerosas notas, que tienen como fuentes diversas consultoras, el INDEC y la EPH, dando cuenta del crecimiento permanente de la pobreza en nuestro país, producida por la recesión económica, el deterioro de la capacidad adquisitiva del salario, la creciente concentración del ingreso y el desempleo. La persistencia de estos procesos hace que este capítulo sobre la estructura social argentina esté construido en base a notas periodísticas, lo cual revela el dinamismo negativo de estos acontecimientos. En una nota del diario *Clarín* del 17 de agosto de 2001 se anuncia:

En apenas un año, con lo cual se manifiesta la radicalidad excluyente del modelo económico, en la Capital y el Gran Buenos Aires, 413.000 personas cayeron en la pobreza, sumándose a los 3.546.000 personas que ya vivían en hogares pobres en mayo de 2000. Así, sobre una población de 12,1 millones de habitantes, casi 4 millones –el 32,7%– de porteños y bonaerenses no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos y servicios, según los datos del INDEC difundidos. Esto significa que uno de cada tres habitantes porteños y del conurbano es pobre (*Clarín*, 2001).

Estas cifras, en cantidad de gente y como porcentaje del total de la población, son las más altas desde 1991. Entonces, hacia agosto de 2001, proyectando los datos de Capital y el conurbano a todo el país, la pobreza se extiende a más de 15 millones de personas, equivalente al 41% de la población. Durante el año 2001, la falta de ingresos suficientes afectó al 37,7% de los argentinos¹³.

Dentro de este crecimiento de la pobreza, lo que más se destaca es el aumento de los indigentes, es decir de las personas que ni siquiera pueden comprar los alimentos para cubrir sus necesidades calóricas básicas. El INDEC considera indigente a las familias que ganan menos de 200 pesos mensuales o 63 pesos si se trata de un adulto sin hijos ni esposa. Y en esa situación de ganar menos de 1,65 pesos diarios en la

13 Hacia agosto de 2001, el INDEC considera *pobres* a las familias –matrimonio y dos hijos– que en la Capital y el conurbano ganan menos de 470 pesos por mes, o 155 pesos mensuales en el caso de un adulto sin esposa ni hijos. Y en la principal región del país, en esa situación de contar con menos de 4 pesos diarios hay 838 mil hogares donde viven 3.959.000 personas. Pensemos estos datos antes de la devaluación, la inflación y el aumento del costo de vida durante el año 2002 y el impacto del llamado “corralito” en los hogares más pobres.

región metropolitana hay 264 mil hogares que albergan a 1.247.000 personas. Como en mayo de 2000 había 892.000 indigentes, eso significa que de los 413 mil nuevos pobres, el grueso –355 mil personas– se explica por el incremento de la llamada pobreza extrema. En la Capital, la pobreza subió del 10,3 al 10,9%, con lo que existen casi 350 mil pobres porteños. Este aumento de la pobreza en el último año se explica por la suba del desempleo y el subempleo, la disminución de la gente ocupada y la caída en casi un 5% de los ingresos del 30% de la población que gana menos de 300 pesos. En particular esto afectó a la gente que vive en el llamado segundo cordón del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, General Sarmiento, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre), donde la pobreza alcanza al 48,9% de sus habitantes. En esos distritos bonaerenses, en un año se agregaron 330 mil nuevos pobres, con lo que ahora una de cada dos personas es pobre. En promedio, los ingresos cayeron casi el 10%, pero bajaron con más intensidad en los sectores de menores recursos, a la vez que el desempleo castigó también con mayor fuerza a esta franja de la población.

Hasta mediados de la década del setenta la pobreza era un fenómeno marginal en la Argentina, y comprendía al 5% de los hogares. En la década del ochenta subió al 12%, pegó un salto con la hiperinflación de 1989-1990, para descender luego, con la convertibilidad. Pero esta caída sólo duró hasta mediados de 1994. Desde entonces subió en forma sostenida, a tal punto que sólo en la Capital y el conurbano el número de pobres se duplicó: de 1,8 millones a casi 4 millones. El crecimiento diario de la pobreza, su magnitud, son visualizados como algo novedoso tanto en la prensa nacional como internacional. El sitio web de la BBC en español, basándose en datos producidos por la mencionada consultora Equis, luego de la crisis de diciembre titula así sus notas sobre el país: “Argentina: un nuevo pobre cada minuto” (casi como quien no puede salir de su asombro) y más aún: “el 60% de los nuevos pobres hace un año pertenecía a la clase media”, “Hacia enero de 2002, los pobres en Argentina sumaban 14 millones [...] Es una vuelta cruel del lenguaje: si hace unos años en América Latina se hablaba de los ‘nuevos ricos’, hoy en Argentina el tema son los ‘nuevos pobres’”. También en el exterior comienzan a construirse nuevos imaginarios sobre la Argentina.

En el segundo semestre de 2001, y en particular a partir de la inminente caída del sistema bancario como consecuencia de la alta fuga de capitales, hecho que luego implicó la implantación del “corralito” –inmovilización de depósitos–, comenzó un proceso de caída social de tono trágico en la sociedad argentina.

La implantación del corralito impactó fuertemente en aquellos sectores de clase media que tenían depósitos en los bancos y vivían

de los intereses de los plazos fijos (en particular la tercera edad y los desempleados cuya indemnización estaba en el banco), y por efecto *derrame* en la clase baja precarizada, como el personal doméstico o quienes vivían de “changas”; es decir a gran parte del trabajo en negro e informal que creció enormemente en forma paralela a la crisis económica de nuestro país durante los noventa, provocando un tendal de hambrientos y buscadores de comida en los tachos de basura. A partir de esos acontecimientos se hicieron más visibles los cartoneros, una de las ocupaciones que más se expandió en estos dos últimos años.

EFFECTO DESALIENTO 2002

El primer semestre de 2002 –período en el cual se desarrolló una parte importante de nuestra investigación– estuvo marcado por un profundo clima de desaliento y falta de perspectivas, que a su vez fue tomado como objeto de estudio. En efecto, la crisis social y económica argentina no cesaba, crecía el desempleo, el trabajo precarizado, y en los sectores con trabajo se observaba una importante caída del poder adquisitivo de los ingresos por el aumento injustificado del costo de los alimentos, lo cual profundizaba la traslación de ingresos a las clases dominantes y empobrecía a la sociedad. Si hacia comienzos de año se afirmaba que los pobres en Argentina sumaban 14 millones (alrededor de un 40% de la población) cuatro meses después circulaba información acerca de que esas cifras se habían incrementado, lo cual expresaba la extrema gravedad de la crisis así como también, fundamentalmente, que a pesar de que el actual gobierno de transición había abandonado el modelo de la convertibilidad, en esencia el modelo económico excluyente no había hecho más que profundizarse. También se destaca en la prensa nacional e internacional y en documentos económicos el notable crecimiento del desempleo, que asciende a más del 20% de la población.

La catarata de datos sobre la situación social que en el segundo trimestre de 2002 difundió el INDEC reflejaba que ya no quedaban rastros de la ilusión que se montó durante la década del noventa, pretendiendo que la Argentina fuera un país del Primer Mundo. Estos datos mostraban que en un año 755 mil personas más estaban desocupadas, según señalaba la Encuesta Permanente de Hogares que se llevó adelante en mayo en 28 aglomerados urbanos del país. Los datos relevados daban cuenta de que en medio de la caída del valor del peso, y con la actividad productiva paralizada, crecía en el mercado laboral el efecto “desaliento”: en un año 400 mil personas dejaron de buscar trabajo, debido las dificultades para hallarlo. Según explicó el titular del INDEC, Juan Carlos Del Bello, fue por este desaliento que entre mayo de 2001 y mayo de 2002 la población económicamente activa –es decir, la gente que está en condiciones de trabajar– se mantuvo estable, en 14,3 millones de personas.

En el caso del Gran Buenos Aires, el INDEC desagregó la caída en la cantidad de gente ocupada por rubros de trabajo. Así, señaló que en la industria hubo un 11,6% menos de trabajadores con empleo respecto a mayo de 2001, cifra que llega al 24,4% en la construcción, 10,3% en el comercio, 15,6% en el transporte, 13% en los servicios financieros y empresas. En tanto, destaca el informe oficial, en el conurbano aumentó un 7,5% la ocupación en la administración pública, enseñanza y salud y un 5,7% en los servicios sociales y personales.

Con niveles de pobreza superiores al 50%, tener trabajo no implica necesariamente acceder a una vida digna. Los datos del INDEC consignaban que el 25,7% de los ocupados ganaba menos de 200 pesos por mes y no llegaba a cubrir los 210 pesos que demandaba la canasta básica para las necesidades de un adulto. En este contexto, cada día había más argentinos con trabajos precarios. En Capital y el Gran Buenos Aires, entre mayo de 2001 y mayo de 2002, 2,1 millones de personas se convirtieron en pobres. Y dentro de ese grupo, los indigentes aumentaron en 1,5 millones. Así, los pobres de la región suman 6 millones de personas y los indigentes 2,7 millones. En esta, la zona más rica del país, en un año la pobreza creció a un ritmo de cuatro nuevos pobres por minuto. Y en los partidos más alejados del conurbano, siete de cada diez personas son pobres.

La pobreza se alimenta de dos fuentes: caída de los ingresos e inflación. Entre mayo de 2001 y mayo de 2002 la pobreza subió el 30,5%. Si bien los datos difundidos muestran que en ese último mes el 49,7% de la población se ubicaba debajo de la línea de pobreza, Del Bello aclaró que, por el efecto de los precios, creció al 51,3% en junio y al 52,8% en julio, cuestión que sigue en ascenso.

En un año, la tasa de indigencia se duplicó, pasó de 10,3% en mayo de 2001 a 22,7% en el mismo mes de 2002. Así, el último registro oficial superó el récord del 47,3% de pobres de octubre de 1989, en medio de la hiperinflación de comienzos de la gestión de Carlos Menem. Claro que en aquel momento los índices de desocupación de la región eran del 7%.

En 2002 el 56,9% de los que trabajaban tenían empleos precarios, improductivos, temporarios, de mera changa, de baja calificación o en negro. Se estima que había más de 200 mil personas que vivían de la venta callejera de cartón, obtenido en la búsqueda de residuos, y del trueque.

Compartimos con Feijóo (2001) que la sociedad argentina fue desmantelada tanto económica como simbólicamente en términos de derechos y bienestar. Si bien el deterioro social afecta al conjunto de América Latina y el crecimiento de la desigualdad social se manifiesta también en sociedades del Primer Mundo, en nuestro país asume una significación peculiar ya que se trata de una sociedad que supo conocer

un nivel de vida más alto, una mayor calidad de vida, que se pensó como un país rico. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo afectó en el plano de las representaciones este doloroso proceso que estamos describiendo?

LOS VULNERABLES: JÓVENES, NIÑOS Y TERCERA EDAD

El aspecto más trágico del proceso que describimos en relación con los datos de la crisis, circunscriptos al año 2001 y 2002, ha sido el crecimiento de la pobreza en los jóvenes y niños, ya que el 70% de los jóvenes menores de 18 años es pobre o indigente.

Esta población sumaba 8.600.000 personas. La mayoría son indigentes, es decir, viven en hogares con ingresos menores a 300 pesos. En diciembre, el porcentaje era del 56,4%, unos 7 millones de chicos. En Argentina, 7 de cada 10 chicos y jóvenes viven en hogares pobres. Pero de esa cantidad, más de la mitad –casi 4– son indigentes. En ciertas zonas del Gran Buenos Aires y en el norte del país –Salta, Jujuy, Chaco y Misiones– aquella proporción se elevaba a 8 y los indigentes trepaban a casi 5, de acuerdo a un informe divulgado por Siempro, organismo que depende de la Presidencia. Así, lo que más crecía en la Argentina post-crisis era la pobreza infantil y juvenil, y en especial la indigencia.

En todo el país había entonces 12,5 millones de menores de 18 años. El 69,2% –8,6 millones de chicos– vivían en 3,3 millones de hogares pobres. El informe mencionado señalaba que “los hogares con niños y adolescentes son los más castigados por el incremento de la pobreza y la indigencia”.

De los 8,6 millones de niños pobres, más de la mitad –4,4 millones– son indigentes. Esto significa que viven en familias que no pueden suministrarles la alimentación básica, lo que explica el aumento de casos de desnutrición infantil en el interior del país y en el conurbano bonaerense. Los datos oficiales indicaban que del total de niños y jóvenes pobres, mes a mes subía la proporción de menores indigentes o en extrema pobreza.

Estos datos expresaban la radicalidad excluyente del modelo económico político y social vigente en la Argentina en las últimas décadas y las consecuencias a largo plazo. En relación a los menores, los datos se vuelven más brutales. Si en 1998 había 5,7 millones de menores pobres, desde entonces la pobreza infantil creció en forma sostenida hasta alcanzar, en diciembre de 2001, al 56,4% de los jóvenes: 7 millones. Así, en apenas seis meses, la pobreza infantil y juvenil sumó 1,6 millones de chicos, es decir casi un 23%, a razón de 266 mil por mes. La falta de ingresos básicos de los padres se complementa con otros datos tanto o más impactantes vinculados a la precariedad de la inserción laboral de los miembros de los hogares pobres. La precariedad parece ser el rasgo constitutivo de la mayoría de la juventud argentina; en los dos últimos

años, casi el 80% de los menores de 18 años transitó alguna vez por la pobreza, ya que la desocupación alcanza al 20% de los jefes de hogar pobres. En general, nadie trabaja en esos hogares.

Otro dato revelador de la dimensión de la crisis y de la vulnerabilidad es la pérdida de derechos, ya que en más de la mitad de los hogares pobres los que trabajan no tienen protección laboral, y en tres de cada 4 hogares pobres no hay ningún trabajador con cobertura social (Cuadro 4).

Si nos referimos a los niños, debemos decir que el 72% de los chicos de menos de 12 años vive en la pobreza. La indigencia afectaría a casi el 40%. Esto provoca más desnutrición infantil y problemas en el aprendizaje.

Como en total existen 6,3 millones de niños, los menores pobres suman 4.538.000. De ese total, 2.450.000 son indigentes. Así, 3 de cada 4 chicos son pobres. Pero en ciertas zonas del conurbano bonaerense y del noreste del país, como Jujuy, Tucumán o Salta, la pobreza infantil llega al 82%. Y la indigencia afecta a casi el 40% de los menores. En la Capital y el Gran Buenos Aires, la pobreza infantil era del 72%, mientras la indigencia abarcaba al 38%. Así, por lejos, la mayor pobreza e indigencia es la que afectaría a los niños. Según los datos oficiales, un niño es indigente si su familia no dispone de entre 35 y 85 pesos por mes para comprarle los alimentos básicos. Y es pobre si en su casa no tienen entre 75 y 186 pesos por mes para costear los alimentos y servicios básicos (como ropa o libros escolares). Estos datos oficiales no toman en cuenta aún la incidencia del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que otorga una ayuda de 150 pesos mensuales a cada familia con hijos. Pero según Artemio López, director de la consultora Equis, con el Plan Jefes y Jefas de Hogar la pobreza infantil no disminuye porque la ayuda de 150 pesos mensuales no alcanza para sacar a las familias de la pobreza y existen muchas familias desocupadas que aún no reciben esa ayuda. En cambio, López afirma que “sí tiene algún efecto sobre la indigencia infantil, que podría disminuir del 40 al 30% del total”. No obstante, como los precios de los alimentos subían más que el resto, la ayuda de 150 pesos resultaba cada vez más exigua para hacer frente a la indigencia.

Entre los niños menores de 5 años la pobreza afectaba al 70,2%, lo que podría explicar el aumento de la desnutrición infantil, un fenómeno que cobró auge en los últimos meses, como describiremos más adelante. Y la mayor pobreza –con el 73,9% del total– se registra entre los menores de 6 a 12 años, lo que aumenta las dificultades de aprendizaje entre quienes comienzan el ciclo escolar. La información oficial marca que hay una asistencia escolar del orden del 98,7 al 99,8% entre los menores pobres de 6 a 12 años. Y que en los últimos años, a la par que aumentó la pobreza, también subió la asistencia escolar de los me-

nores pobres. Estos porcentajes indican que la mayor o menor pobreza o indigencia entre las distintas regiones del país no altera la concurrencia escolar. Y esto, según los especialistas, se explicaría por los programas alimentarios que se otorgan en las escuelas. En otras palabras, los chicos pobres o indigentes concurren a la escuela porque muchas veces disponen de una ración de comida (desayuno y almuerzo) de la que carecen en sus hogares. La falta de ingresos básicos se complementa con otros datos tanto o más impactantes porque, además de la mayor desocupación, determina problemas de vivienda, hacinamiento y desatención médica. Esto, sumado a deficiencias estructurales en materia de prevención de enfermedades y de atención sanitaria, explicaría el importante aumento de los casos de desnutrición infantil y enfermedades que se creían superadas, como la tuberculosis. Con estos datos surge que en los últimos cuatro años casi el 90% de los menores de 12 años transitó alguna vez por la pobreza. Y un porcentaje similar vivía en hogares de padres desocupados o que trabajan sin protección laboral o cobertura de Seguridad Social (Cuadro 5).

Los jóvenes y los niños comparten su vulnerabilidad y precariedad con la tercera edad, es decir, los sectores que más necesitan de políticas sociales, precisamente en un país donde el Estado ha sido desmantelado. Se trata de 222.413 residentes de la tercera edad, de los cuales el 60% son mujeres, que no logran acceder a ingresos que oscilan entre 1,3 pesos diarios para la mujer y 1,7 para el hombre para poder obtener una dieta básica de alimentos que les permita realizar movimientos moderados, esto es, una dieta de estricta sobrevida biológica.

Al respecto, el Cuadro 6 muestra la población total de mayores de 60 años para el mes de julio del año 2000 y la proporción de indigentes sobre el total.

El Cuadro 7 permite ver que la distribución de los indigentes mayores de 60 años es muy heterogénea según las regiones de residencia. Como se observa, más del 60% de los mayores de 60 años indigentes residían en el Gran Buenos Aires o región centro. La mayor intensidad de indigencia para el tramo de mayores de 60 años se observa en las regiones NEA y NOA, intensidad compensada en parte por la juventud relativa de la población residente en estas regiones. En efecto, el tramo de mayores de 60 años allí es, junto con el de la Patagonia, el menor tramo de tercera edad del país, del orden del 10% de la población total contra el 17,7% de mayores de 60 años residentes en Río Cuarto, el 19,7% del Gran Rosario o el 23,5% sobre la población total de la Capital Federal.

EL HAMBRE... UN ESCENARIO DE DESOLACIÓN Y DE DIFÍCIL RETORNO

Los datos sobre desnutrición constituyen el punto culminante de cómo esta degradación social somete a los cuerpos. Según un relevamiento

de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy, la desnutrición alcanza al 19,7% de los menores de 2 años, y trepa al 24,5% en la franja de 2 a 5 años. Susques, en la Puna (región norte de la Argentina) sigue siendo una zona crítica, pero ahora fue superada por El Talar, una comunidad rural de la región de El Ramal: allí, el 36% de los niños estaba desnutrido. En Catamarca, donde más de la mitad de la gente tenía un sueldo menor a 250 pesos, “todos los días se asiste a niños con desnutrición en hospitales públicos y unidades sanitarias de la capital y del interior, aunque no presentan cuadros avanzados”, señalaba a *Clarín* el pediatra Luis del Pino Ahumada. Si bien no hay estadísticas sobre desnutrición infantil, los médicos revelan que los chicos afectados viven en los asentamientos del sur y del norte de la capital, y en Santa María, en el límite con la provincia de Tucumán en el norte argentino.

Asimismo, un estudio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero revelaba que en esa provincia de 728.982 habitantes, el 57,3% son pobres y el 18,8% indigentes. Pero no se habían difundido estadísticas sobre desnutrición y mortalidad infantil, y el ministro de Salud y Acción Social de entonces, Ricardo Leguizamón, no daba explicaciones. En el Chaco, provincia del noreste argentino, el 7,5% de los menores de 5 años –unos 10 mil– estaba desnutrido en el año 2000, último registro difundido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, datos confiables del Centro de Estudios Nelson Mandela duplicaban ese número. En el Gran Resistencia y en El Impenetrable había bolsones donde en el año 2000 la desnutrición llegaba al 60%.

En Formosa, una de las provincias más pobres de la Argentina, situada en el noreste, “los índices de desnutrición ascendían al 13%, diez puntos por debajo de la media nacional”, según el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez.

LA CUESTIÓN DEL TRABAJO: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBJETIVIDAD DIEZMADA

La presentación detallada de los datos de la pobreza realizada hasta el momento tiene como propósito situar al lector en la tragedia de la sociedad argentina actual, sin cuya descripción, sostenemos, es imposible entender el proyecto de dominación que se construyó en Argentina y los procesos culturales recientes.

Por último y para finalizar la descripción de este cuadro crítico, damos cuenta de una de las manifestaciones más evidentes de la crisis social y del crecimiento de la pobreza: la cuestión laboral. En este punto se articula el engranaje de la construcción de la desigualdad. Argentina pasó de ser un país productivo en una región periférica, con una importante clase obrera, con altos porcentajes de organiza-

ción y sindicalización, a un país orientado a los servicios, provocando un tendal de desocupación y subocupación así como una importante cantidad de gente empleada en trabajos de menor calificación para la que había sido formada.

Para el conjunto de los argentinos, el desempleo constituye el principal problema social. Esta afirmación aparece en todas las fuentes que conforman el corpus de esta investigación. En ese marco, es notable el crecimiento del trabajo informal o en negro, donde el trabajador no es objeto de los aportes previsionales ni de seguridad social previstos por ley. Para observar la magnitud del fenómeno bajo análisis, el Cuadro 8 permite apreciar la evolución del empleo informal de los asalariados a nivel nacional durante la última década. Como se puede comprobar, la tasa global de trabajadores informales creció un 46,6% en la década del noventa, lo cual refuerza la idea expresada en el punto anterior acerca de la precarización. Dicha tasa de informalidad era del 25,3% del total de trabajadores bajo relación de dependencia en los registros de la primera medición de los años noventa, correspondiente a la Encuesta Permanente de Hogares de mayo del año 1990. Sin embargo, y como contracara paradójica de la paulatina introducción de normas flexibles en los convenios y la sustancial rebaja de aportes patronales acontecidas a lo largo de la década, tras la última medición de la EPH de octubre de 1999, ya el 37,1% del total de trabajadores, esto es cerca de 3.700.000 asalariados, no recibía aportes legales, situación de informalidad que representa una evasión anual de 9.700 millones de pesos para la Seguridad Social, Jubilaciones, PAMI, Obras Sociales, Fondo de Empleo y Asignaciones Familiares¹⁴.

Asimismo, la intensidad de la informalidad desagregada por rama de actividad muestra al empleo doméstico (95,3%) y la construcción (65,1%) encabezando la escala de trabajo ilegal, en tanto las actividades más formalizadas son la electricidad, gas y agua (6,3%) y la administración pública (14,8%).

Si bien el fenómeno atraviesa al conjunto social, la mujer resulta con tasas de informalidad un 18% superiores a las del hombre, diferencia probablemente inducida por el tipo de ocupación femenina diferencial, sobre-representada en establecimientos pequeños y el trabajo doméstico. El atributo de edad define fuertemente la tasa de informalización, siendo los adolescentes y jóvenes los de mayor carencia con tasas de informalidad superiores al 55% promedio entre los 18 y 27 años. En general, la tasa de

14 Once provincias manifiestan tasas de informalidad superiores al promedio nacional del 37,1%, siendo la peor situada Tucumán con un 49,3% de trabajadores informales, seguida por Salta y Entre Ríos con un 42,9% de trabajadores sin aportes, completando Santiago del Estero (42,1%) y Jujuy (41%) los cinco peores distritos respecto a tasa de informalidad.

informalidad desciende con la edad hasta encontrar su piso en el período comprendido entre los 35 y 61 años (29,6%) para volver a subir abruptamente para los trabajadores de más de 61 años con tasas de trabajo en negro superiores al 45%. El nivel educativo alcanzado resulta un atributo muy significativo para explicar el nivel de informalidad del trabajador.

El atributo de antigüedad en el puesto es el que más explica la tasa de informalidad. Para los trabajadores de 1 a 6 meses de antigüedad, el nivel de trabajo en negro alcanza al 60% del tramo, esto es un 62% por sobre el promedio nacional y un 195% superior a la tasa de informalidad de trabajadores con 5 y hasta 8 años de antigüedad.

Esta situación de fuerte impacto diferencial de la antigüedad del trabajador sobre la tasa de informalidad permite asociar efectos benéficos sobre la tasa de trabajo informal si se promueven activamente los aportes legales en el primer semestre de incorporación del trabajador, que resulta estadísticamente el lapso de mayor evasión por parte de los empleadores.

La experiencia también es significativa, aunque menos que la antigüedad, en la evolución de la tasa de informalidad, que en general desciende a medida que aumenta la experiencia, salvo para trabajadores de más de 46 años de experiencia que sufren tasas de informalidad superiores al 48%. Por último, la tasa de informalidad varía de manera inversa al nivel salarial del trabajador, observándose que el 20% más pobre, con ingresos promedio de 175 pesos mensuales manifiesta una tasa de informalidad cercana al 90%, situación esta que, si se busca disminuir la informalidad, sugiere un control diferencial sobre este tramo de trabajadores pobres.

Estadísticamente se prueba que las más altas tasas de informalidad, superiores al 60%, se manifiestan actualmente en los trabajadores adolescentes y jóvenes, remunerados con salarios ubicados en el estrato bajo (dos primeros quintiles de ingreso), con escolarización hasta primaria completa, empleados en establecimientos de hasta 25 trabajadores y con antigüedad en el empleo de hasta 6 meses, y sobre ellos debe operar con eficacia diferencial la legislación laboral.

De los grupos más vulnerables descriptos, sólo los de la tercera edad pueden referirse a una época dorada para identificar lo que ahora les falta.

Señala Fradkin (2002: 16)¹⁵ que las últimas medidas del ministro de Economía de la Alianza en diciembre de 2001 (como el “corralito” bancario) no sólo afectaron a los sectores medios en su capacidad de consumo, sino que provocaron el desmantelamiento inmediato de la economía informal, aquella que da de vivir a no menos del 50% de la población.

15 Fradkin considera que el ciclo de 1975 hasta 2001 se ha cerrado y comienza otro, no necesariamente mejor. Ver Fradkin (2002).

Como expresamos en los puntos anteriores, a pesar de lo artificial de la política cambiaria de los noventa, la devaluación y posterior pesificación no significaron, del modo brutal en que fueron hechas, un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por el contrario, ha sido preocupante el crecimiento del desempleo a lo largo del año 2002 y particularmente en los últimos tres meses. Según datos oficiales, este llegaba al 22% (*Clarín*, 2002). Esa cifra equivaldría a 3,2 millones de desocupados y, en términos diarios, a la creación de 7.500 desocupados nuevos por día.

La desocupación y la pobreza llegaron a su récord histórico hacia mediados de 2002. Argentina contaba hasta ese momento con 3.036.000 desempleados: el 21,5% de la población económicamente activa. Y la subocupación llegó al 18,6%, esto es 2.630.000 personas. Esto provocó que –en Capital y Gran Buenos Aires sumados– más de la mitad de la población sea hoy pobre. Los picos de desocupación se registraron en Gran Catamarca (25,5%), Gran Córdoba (25,3%), Gran Rosario (24,3%) y Gran Buenos Aires (22%) (Cuadro 9).

En 2002 las cifras del INDEC desnudan la situación de 5.666.000 argentinos con problemas de empleo, que intentan sobrevivir en medio de una crisis sin precedentes. Por primera vez el pico de la desocupación coincide con un fuerte aumento de la pobreza, que alcanzó en junio de ese año el 52,8% en Capital y Gran Buenos Aires. Así, a una de cada dos personas no le alcanzan sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas, calculadas en 650 pesos para una familia tipo. Y el 22% entra en la categoría de indigentes: directamente no tienen para comer porque no llegan a los 280 pesos que requiere la canasta de alimentos.

Para finalizar esta introducción sobre la construcción política de la desigualdad, decimos que la sociedad argentina está conformada por casi 20 millones de pobres, 2 millones de desocupados y otros tantos subocupados. Se trata de un país donde la mayor parte de los pobres son niños y donde la mayor parte de los niños son pobres. En valores absolutos, la mayoría de la población pobre vive en los centros urbanos más importantes. En términos relativos, el NEA y el NOA revelan porcentajes de población en situación de pobreza e indigencia que son un 40% y un 78% superiores a los promedios nacionales. Considerando el período recesivo iniciado en 1998, la desocupación ha trepado un 74,2%, la pobreza un 67% y la indigencia un 180%. Finalizados los cinco primeros meses del año, la caída promedio en los ingresos asciende a 21,6%.

La misma evaluación referida a la población pobre e indigente exhibe un cuadro mucho peor. Estos han perdido en un 26,3 y un 29,9% respectivamente en el mismo período. Asimismo, en términos anuales, la caída sería de 56,3% y 62,5% en cada caso. El ingreso promedio de los asalariados fue para finales de 2002 un 66,7% inferior al vigente en 1974 y equivalió a menos de la mitad del de aquel entonces. Paradójicamente, la Argentina produce valores equivalentes a los necesarios para

que 300 millones de personas estén por encima de la línea de indigencia y que 128 millones de personas lo estén por encima de la línea de pobreza. Redistribuyendo el 2,5% del consumo total de los hogares no habría indigencia en la Argentina. Redistribuyendo el 14,8% del consumo total de los hogares no habría pobres en nuestro país¹⁶.

Nos preguntamos entonces en este escenario de profundo deterioro de la sociedad argentina, de destrucción de su tejido social a través del desempleo y el hambre, cómo se construye un orden hegemónico, qué características tiene el discurso televisivo periodístico en el marco del proceso concentracionario de capital y cómo los últimos agrupamientos del campo televisivo han configurado un discurso que acompaña la crisis social. El fantasma de la inseguridad sobre el que permanentemente insisten los medios tiende a velar el potencial conflictivo que revelan estos datos de crecimiento profundo de la desigualdad, en los que la Argentina aparece como uno de los países más desiguales de América Latina. ¿Qué representaciones sociales se sostienen, cuáles caen, cuáles están surgiendo en este escenario? ¿Qué imagen de país se está construyendo en el nuevo milenio cuando ya queda casi nada del país del ganado y de las mieses, donde los chicos se mueren de hambre, y donde un porcentaje de ellos no tiene futuro ni proyección humana porque la falta de atención, la desnutrición, las pésimas condiciones de vida y de crecimiento los inhabilita como seres humanos, con derechos ciudadanos en el presente y en el futuro?

Como señala Hopenhayn (1999), la paradoja que se produce en la actualidad es la convivencia de altos niveles educativos con condiciones de vida pobres, lo cual produce transformaciones de orden cultural en términos de identidades y subculturas. También se ponen en evidencia mayores niveles de heterogeneidad. “No sólo pobres, jóvenes y ciudadanos de diverso tipo se convierten poco a poco en una ciudadanía de difícil representación”, afirma Feijóo (2001) en el ensayo antes mencionado. Sobre los alcances de estos fenómenos a nivel cultural y subjetivo, resulta importante mencionar también cómo estos procesos afectan las identidades y promueven la pérdida de la sociabilidad y la posibilidad de acciones colectivas.

DESAPARICIÓN DE LA LEGITIMIDAD POLÍTICA DEL ORDEN SOCIAL LOS RASGOS DE LA CRISIS

Los traumáticos acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 remiten a una multiplicidad de dimensiones, en la cual la gravedad de la crisis social no es de menor importancia. Sin embargo, a la luz del

16 Al respecto, ver el Documento de la CTA “Salarios, pobreza e indigencia en la Argentina del 2002” (Lozano, 2002).

problema a construir a lo largo de este libro, no podemos dejar de dar cuenta de la coyuntura político-económica que sustentó el estallido de diciembre, elemento que constituyó la base de cierto sentimiento de anomia vivido en el último trimestre de 2001. Más adelante nos proponemos abordar la dinámica ideológica y representacional de los intermediarios culturales más significativos en esos días y la emergencia de una dinámica imaginaria novedosa en las clases medias.

Remitiéndonos a los comienzos de la transición democrática, se produjo una gran cantidad de libros de economía, política y ensayos que se proponían otorgar sentido a lo que la sociedad encontraba sin sentido: ¿Por qué la sociedad argentina había atravesado una dictadura sumamente sangrienta, agresiva, represiva durante 8 años? ¿Qué significaba la implementación de la figura del desaparecido como forma de terrorismo de Estado? Si bien este no es nuestro tema, sino centrarnos en la dinámica social, cultural, política y económica de la década del noventa, el asunto retorna. Y lo hace porque lo que interesa destacar es que con los años de la dictadura comenzó un largo ciclo de transformación profunda de la sociedad argentina como pretendimos presentar en los puntos anteriores, que a su vez continuó en los años que nos interesa analizar. Pensar las formas en que la sociedad se representa a sí misma presupone remontarse a la violencia desatada sobre ideas e imaginarios políticos y sociales de larga data.

Se suele asociar a los noventa con el cambio cultural que se instaló en Occidente como consecuencia de la caída del Muro de Berlín¹⁷, símbolo del fin de la Guerra Fría y de la existencia de un mundo otro. Sin embargo, en Argentina, “el Muro” parecía haber caído o haber sido derribado antes. La izquierda en nuestro país, tanto política como intelectualmente, no logró el arraigo popular que tuvo y aún tiene en la sociedad uruguaya y que tuvo en la chilena. Aquí prácticamente desapareció como fuerza política, en sus diversas variantes, siendo identificada absolutamente desde distintas voces con el concepto de autoritarismo y otras formas de dictadura. En la transición se instaló el discurso de la democracia, y en ese contexto hablar de transformaciones revolucionarias aparecía asociado a conceptos denostados por el conjunto de la sociedad¹⁸. Quizás podamos recordar que Alfonsín denominó “la teoría

17 El sociólogo Francisco Delich (2002) se propone resaltar cuán poco fue discutido en nuestro medio el significado civilizatorio de la caída del Muro de Berlín en 1989. Si la debilitada izquierda argentina no lo tuvo en cuenta, este acontecimiento fue resignificado por el pensamiento de derecha neoliberal que comenzó a ocupar la política y los medios de comunicación en la Argentina de los noventa, para consolidarse y legitimarse. Se hizo un uso perverso e ideológico de este acontecimiento.

18 De todos modos nos interesa recordar que el debilitamiento de un discurso de izquierda en las representaciones sociales y políticas argentinas también debe ser pensado a la luz de las debilidades y devaneos de la historia de la izquierda argentina.

de los dos demonios”, en el marco del Juicio a las Juntas, al accionar de la guerrilla y otras organizaciones armadas de izquierda, colocándolas en un plano de igualdad con la feroz represión desatada por el Estado sobre el conjunto de la población durante los años de la dictadura militar. La insistencia en el discurso de la democracia opacó la existencia y perdurabilidad de los factores de poder y fortaleció los prejuicios históricos que parte de la sociedad argentina ha tenido y tiene con el pensamiento y la acción de izquierda. Y así es como el poder se puso en escena nuevamente a través tanto de levantamientos militares de sectores del Ejército que no asumieron su responsabilidad durante la represión en los años de la dictadura como del poder financiero que viene incidiendo en la conformación de nuevas relaciones de dominación. El no reconocimiento de este último fue debilitando el discurso cultural de la democracia¹⁹ y la racionalidad económica se impuso con toda su fuerza, legitimando durante diez años al gobierno de Carlos Menem. Lo decisivo en este proceso es que desaparece la autonomía relativa del sistema político, que queda férreamente subordinado a los intereses de los sectores dominantes. El economista Basualdo (2001: 62), aludiendo a este momento político, apunta “a la pérdida de identidad social histórica que definía a los partidos mayoritarios”. Como consecuencia de este vaciamiento ideológico y social que se despliega en los dos partidos que sintetizan el funcionamiento del sistema político, desaparece la discusión político-ideológica, e incluso la diferenciación de las líneas internas. Este entramado también desaparece del conjunto de la sociedad durante la década del noventa, supuestamente vinculada a la existencia del denominado clima posmoderno fundado en otra ética más estética y del consumo (Bauman, 2000).

Si bien esta afirmación se podría tomar con cierta relatividad, ya que los partidos mayoritarios no han sido nunca homogéneos ideológicamente y condensaban fuertes tensiones, a menudo antagónicas y violentas, se desprenden de ella dos cuestiones que nos interesan: cómo fueron cambiando las representaciones sociales de la sociedad argentina a partir de la última dictadura militar; lo que llevaría a hablar de las consecuencias culturales y no conocidas aún de la represión y de las desapariciones, qué dejaron en el inconciente colectivo, qué significó la transición democrática; y en particular, como es señalado en diversos trabajos, cómo el modo de pensarse e imaginarse de la sociedad argentina se transformó radicalmente durante el menemismo.

Si bien reconocemos un proceso de larga duración, nos centramos en la articulación más reciente a partir de la dinámica que ha

19 He trabajado este tema en mi artículo “El devenir de lo político cultural en la Argentina, una nueva cultura o nuevas subjetividades del pensamiento” (Wortman, 2001).

adquirido en la última década la comunicación masiva con la conformación de conglomerados multimedias, cuya dinámica acompaña las nuevas formas del capitalismo de la última década en la Argentina. Sostenemos que este entramado produce determinado tipo de escena mediática, estética e ideológica y confirma un nuevo orden social.

UNA APROXIMACIÓN A LA CRISIS DE DICIEMBRE DE 2001

En el contexto de agudización del empobrecimiento y hambre descripto anteriormente, hacia mediados de diciembre comienzan a producirse saqueos a supermercados y autoservicios de tamaño mediano, provocando un clima cotidiano de temor e incertidumbre pronunciados. Por su parte, los medios de comunicación y en particular la TV concentraron su programación en la difusión de imágenes sobre los hechos que iban ocurriendo diariamente, contribuyendo a la desazón general. Apenas producidos los saqueos en el interior del país y el Gran Buenos Aires, diversos analistas de la prensa pretendieron comparar lo que estaba sucediendo con los saqueos ocurridos en 1989 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y en el Gran Buenos Aires, que dieron lugar al debilitamiento y posterior caída del gobierno de Alfonsín.

El análisis del economista Lozano (2001) puede ayudarnos a entender la singularidad de esta coyuntura. Este señala la existencia de diferencias entre ambos episodios, ya que los producidos más recientemente aluden a una crisis del sistema político en general. Si el justicialismo aparecía en aquel momento como el canal de legitimación y movilización de los sectores populares, hacia fines de 2001 la situación se presentaba más compleja. No se vislumbraba una opción política como recuperando la legitimidad plena y concitando las expectativas y la movilización del conjunto. Lo que definía ese momento era una profunda crisis de representación política²⁰.

20 En este sentido, el año 2001 exhibe los siguientes aspectos, según los describe Lozano (2001):

- Profunda ilegitimidad de las políticas económicas vigentes que se expresaron en el terreno electoral en la catastrófica actuación oficial (la Alianza gobernante perdió 5.405.022 votos en sólo dos años).

- Crisis del sistema de representación que se expresa en la dificultad del principal partido de oposición (el justicialismo) para absorber la pérdida de votos del oficialismo quedando incluso por debajo de su *performance* en las últimas dos elecciones. Obtuvo 1.119.587 votos menos que en 1999, y 440.631 menos que en 1997.

- Crisis que se manifiesta, a su vez, en la sistemática expansión que desde 1989 en adelante se observa en la sumatoria de quienes dejan de votar (nuevos ausentes), quienes anulan su voto y quienes votan en blanco. Para el caso del comicio reciente, el total de nuevos votos ausentes (3.652.872), de votos nulos (2.358.291) y de votos en blanco (1.512.920) asciende a 7.524.083. Agregado este que representa el principal a nivel nacional, mayor incluso que el obtenido por el partido triunfante en las elecciones (justicialismo). Esta constatación nos parece relevante

Reflexionando sobre esta cuestión consideramos que el momento culminante de este fenómeno se había puesto en evidencia con las últimas elecciones para la renovación de una parte de la Cámara de Diputados, en particular en la ocurrida el 14 de octubre de 2001, donde lo que ganó por primera vez fue el voto en blanco, acontecimiento que fue nombrado por los medios como el “voto bronca” (Cuadro 10). El número de abstencionistas se incrementó del 18,4% en 1999 al 26,3% en esas elecciones. Es decir, alrededor de 2,5 millones más de ciudadanos no concurrieron a los comicios. En cuanto a los votos blancos y anulados emitidos en dicha oportunidad, representaron alrededor del 22% de los votos para las elecciones a diputados nacionales, mientras que esa proporción era del 6,6% en 1999. Ese año, peronistas y radicales concentraron el 76,7% de los sufragios, en tanto que en estas elecciones la suma de sus votos se retrajo hasta el 55,2% de los votos positivos. La agrupación Argentina por una República de Iguales (ARI), una fuerza política nueva de centroizquierda liderada por una diputada proveniente del radicalismo, Elisa Carrió, obtuvo el 7,28% de los votos, y el Polo Social, fuerza política conformada por sectores sindicales alternativos a las conducciones oficiales, cuyo candidato era un cura del Tercer Mundo, el padre Farinello, obtuvo el 4,13%, en tanto que los partidos de izquierda ya existentes incrementaron su caudal electoral logrando de ese modo su ingreso al Parlamento (Cheresky et al., 2001: 2). Las elecciones en general fueron ganadas por el peronismo, que se posicionó con aspiraciones fundadas para las elecciones presidenciales que tendrían lugar en el año 2003. Es importante destacar que el caudal de votos obtenidos por esta fuerza política fue inferior al de las elecciones precedentes. El triunfo del peronismo como fuerza hegemónica se explica no por su progreso sino por una derrota de la Alianza gobernante. Los resultados de estas elecciones marcaron el rumbo por venir. No era casual que algunos programas periodísticos pusieran como música de fondo la marcha peronista, como si estuvieran al tanto de lo que iba a acontecer

a la luz de entender las prácticas violentas de ciertos sectores medios contra los políticos y contra la política en general, aunque con sentidos diversos y oscuros aún para el análisis.

-Crisis de representación que no habla de una participación escasa de la sociedad, ya que se da en un contexto de fuerte movilización social en repudio a las estrategias de ajuste vigentes. Debe destacarse que a diferencia de lo que ocurría a comienzos de 1990 cuando el paradigma neoliberal aparecía como incuestionable, hoy los criterios de bien y de verdad que socialmente lo sustentaron están puestos en crisis.

-Crisis de representación que se agudiza al observarse que incluso las estructuras políticas tradicionales (radicalismo y justicialismo) tienden a articular su discurso con los objetivos de las facciones del bloque dominante que resultan postergadas en el presente contexto. Cuestión que amerita y justifica el embate y la importancia que ha adoptado el discurso de aquellos sectores más ligados al proyecto actual sobre la necesidad de bajar el costo de la política y reformarla en profundidad.

de inmediato²¹. Asimismo, otro aspecto que señala diferencias con lo que ocurría en 1989 es el crecimiento de la movilización social, que se expresa por vía de organizaciones que exhiben autonomía respecto de las estructuras políticas tradicionales, adoptando formas novedosas y de mayor radicalidad, como por ejemplo el movimiento piquetero. En este aspecto, merece destacarse especialmente la emergencia de fenómenos sociales en el Gran Buenos Aires (distrito decisivo para la gobernabilidad del presente régimen de dominación) que se canalizan claramente por fuera de las estructuras políticas tradicionales y particularmente del Partido Justicialista y la CGT afín al mismo. Esta es una diferencia central respecto al contexto del año 1989, donde el peronismo en su renovado accionar privatista y desregulador mantenía una elevada capacidad de control sobre el conflicto social. Ahora la protesta social aparecía, por un lado, a través del fenómeno de los piquetes de trabajadores desocupados articulados (Auyero, 2002; Svampa y Pereyra, 2003); y por otro, con la resistencia de actores sindicales y sociales que expresan el fenómeno de involución de las capas medias (docentes, estatales, estudiantes, profesores universitarios, pequeños y medianos empresarios, etc.) y que discuten nuevas formas orgánicas (una nueva Central de Trabajadores, nuevos modos de organización gremial y empresarial). Los movimientos piqueteros, que desde 1996 habían surgido como nuevo actor político de peso, comenzaban a romper cierta unidad lograda en los años del menemismo. La ruptura en el movimiento piquetero se demarcaba entre dos tendencias: una de origen nacional y popular, aunque desvinculada de estructuras partidarias, alineados con la CTA, y otra más radical ligada a partidos de la izquierda trotskista.

Como venimos desarrollando en los puntos anteriores, el escenario social y económico expresaba una recesión económica que databa de 1998 y que el gobierno de la Alianza no había podido solucionar desde su llegada al poder en diciembre de 1999. Por errores estratégicos en el diseño de las políticas económicas y por la fragilidad política interna de la coalición gobernante, la debacle económica y social se instalaba en un horizonte cada vez más cercano.

En segundo término, la extrema dependencia de financiación externa que había precisado y precisaba el modelo económico de la convertibilidad se enfrentaba con la negativa de los organismos internacionales de crédito a seguir financiando a un país con una inmensa deuda externa y con un alto déficit fiscal primario que, en medio de la

21 También la prensa gráfica alude al avance político del peronismo. El título de tapa de la revista *Noticias* del 1 de diciembre de 2001, "El crecimiento del poder peronista", así lo confirma.

gran recesión, indicaba a las claras que no se podrían seguir abonando los intereses de la deuda pública ya contraída.

En julio de 2001, el cierre definitivo de los mercados de crédito externos condujo a la Alianza de centroderecha, encabezada por el presidente Fernando De la Rúa y el ministro de Economía Domingo Cavallo a perpetrar un desesperado intento por no caer en *default* y sostener así la convertibilidad. En ese mes se acuerda implementar la política presupuestaria del “déficit cero”, que a grandes rasgos suponía privilegiar el pago de los intereses de la deuda externa en detrimento de los sueldos, inversiones y gasto social del Estado. Esta medida no sólo agravaba la recesión al disminuir el ingreso de los empleados estatales y las inversiones públicas, sino que activaba fuertemente el conflicto social y colocaba definitivamente a las clases medias, que habían sido la base sociopolítica del gobierno, en el arco opositor. En menos de dos años, la debilitada Alianza desperdiciaba un capital electoral del 50% del padrón nacional. Vale aclarar que en ese momento ya no se podía hablar de Alianza, dado que parte del FREPASO había abandonado el gobierno y el sector alfonsinista de la UCR se disponía a hacerlo luego de la implementación del déficit cero²². Al segundo mes de anunciada, la política de déficit cero había naufragado, dejándole al gobierno mayor recesión, mayor protesta social y un aislamiento político que tornaba inviable cualquier iniciativa propia.

En relación al diagnóstico de la crisis, hay interpretaciones que señalan una crisis de hegemonía y otros que hablan de resquebrajamiento del bloque dominante, lo cual se manifiesta en la tensa puja acerca de la política monetaria y cambiaría que signó al gobierno de De la Rúa, entre los sectores que se favorecerían con la dolarización y quienes se favorecerían con la devaluación. Frente a este panorama de crisis económica y política, el gobierno en lugar de intentar tejer alianzas que le permitieran recuperar algún grado de gobernabilidad, prosiguió con su

22 La Alianza se constituyó como una suma de fuerzas políticas del llamado campo progresista en alternativa a la hegemonía política menemista. Los candidatos al gobierno nacional por la Alianza fueron Fernando de la Rúa, proveniente del sector más conservador del radicalismo, cuya característica era su poca vinculación con el partido, y como vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, proveniente del peronismo, que había formado el Frente Grande y que en esos años representaba al FREPASO, agrupación de fuerzas políticas representativas del denominado campo progresista. Al vencer al menemismo en 1999 tuvieron que enfrentar un país devastado, endeudado y empobrecido, hecho sumamente desgastante, ya que además, a pesar de las críticas al modelo anterior, había acuerdo en no modificar la política de convertibilidad. En un marco de crisis del sistema político provocada por la presión de los grupos financieros para votar en el Parlamento la Ley de Reforma Laboral, el vicepresidente Álvarez denuncia la existencia de sobornos al interior del Senado. Ante una situación inmanejable, Álvarez renuncia a su cargo de vicepresidente dejando al promisorio gobierno de la Alianza sumido en una profunda debilidad. En menos de dos años, había perdido 5 millones de votos.

objetivo de mantener la convertibilidad monetaria a cualquier precio. En noviembre, ante la constante baja de la recaudación fiscal y con un *default* técnico en ciernes, el ministro de Economía organizó un canje de la deuda pública con acreedores externos e internos, que a poco de concluido no había logrado recuperar la confianza internacional que permitiera restablecer líneas de crédito para financiar el creciente déficit de las cuentas públicas. Ante este nuevo fracaso, el gobierno ordenó un nuevo recorte en el gasto público que abría las puertas a un inminente desborde social. Resulta muy difícil precisar la causa principal para lo que vendría. En todo caso, se sumaron un conjunto de factores, que fueron aprovechados por el peronismo y algunos sectores del radicalismo para generar una suerte de golpe institucional. Contando con mayoría en ambas cámaras y el dominio de casi todas las provincias del país, el peronismo comenzó a operar fuertemente para acelerar la caída del gobierno. En ese marco, el Partido Justicialista aprobó la Ley de Acefalía para lograr un aceitado traspaso adelantado del poder. Por su parte, el presidente de la Nación no mostraba signos de vitalidad política alguna, ya que había hecho política entre su círculo de amistades y familiares más íntimos. También desde las centrales sindicales alineadas con el peronismo se comenzaba a ejercer presión para terminar con el mandato de un gobierno que por esas horas recibía golpes desde todo el arco político. Resulta importante aclarar que si bien el peronismo representaba en ese momento la mayor fuerza política del país, en su interior existían grandes divisiones en torno al liderazgo del partido. Por un lado, aparecía el duhaldismo, ganador en las elecciones legislativas y promotor de una política económica que apoyaba la devaluación y, por otro, se encontraba el menemismo que aún preservaba la presidencia nacional del partido y proponía la dolarización de la economía. Ninguna de las dos líneas lograba hegemonizar el partido y menos aún la unidad interna del peronismo. Además, las elecciones de octubre, si bien habían ungido al partido como amplio ganador, daban como resultado una merma en su piso histórico de votos obtenidos, dejando traslucir una crisis de identidad política en sus tradicionales bases sociales.

Asimismo, la dirigencia económica comenzaba ya a mostrarse dividida entre quienes querían mantener la convertibilidad, sobre todo empresas ligadas al sector financiero y de servicios, y quienes propiciaban una devaluación del peso, en su mayoría empresarios industriales alineados en la Unión Industrial Argentina (UIA) acompañados por algunos dirigentes sindicales pertenecientes a la CGT disidente. Sólo en apariencia, el peronismo mostraba cierto deseo de aprovechar los constantes errores de un gobierno que por estas horas mostraba un alto grado de ineptitud, pero las tensiones internas dentro del partido complicaban la toma de una postura definitiva. En los primeros días de diciembre, el ex presidente Menem se reunió con un primer mandatario

desbordado por los acontecimientos para proponerle la dolarización como condición necesaria para un futuro apoyo del justicialismo que permitiera retomar la gobernabilidad del país. Compartimos con Fradkin (2002) que la crisis final del gobierno de De la Rúa y Cavallo expresa una crisis mayor de las alianzas sociales que sustentaban el poder.

Las cosas empeoraron aún más a comienzos de diciembre cuando, tras una importante “corrida” bancaria, el gobierno decidió confiscar los depósitos existentes en el sistema financiero. Esta medida, tendiente a salvaguardar a algunas instituciones financieras dañadas por la corrida cambiaria, produjo el colapso final del gobierno y del modelo económico de la convertibilidad. Si bien los afectados en forma directa por la confiscación serían los sectores medios que habían perdido sus ahorros bancarios, los efectos del “corralito financiero” se hicieron sentir en todos los estratos sociales. Sobre todo en los sectores de menores recursos, ligados a la economía informal, que pronto sufrieron las mayores carencias por la falta de circulante monetario. La paralización de la vida económica a raíz del corralito financiero producía el golpe de gracia para desatar el caos generalizado.

Ante este escenario de colapso, el 13 de diciembre las tres centrales de trabajadores convocaron a un paro general, cuyo acatamiento fue el más alto de los últimos diez años. La novedad en la huelga la dio el alto acatamiento que tuvo entre los sectores medios, sobre todo profesionales y comerciantes. En algunas ciudades del interior, la jornada de protesta fue acompañada con movilizaciones que, en muchos casos, terminaron con incidentes de violencia y represión policial.

Por su parte, el panorama social era explosivo. Las provincias no habían recibido fondos de la Nación en el último mes, por lo cual la conflictividad social en cada distrito aumentaba día a día. También muchos de los planes sociales que otorgaba la Nación no habían sido abonados. Para colmo de males, el ciclo lectivo de las escuelas primarias había concluido y los comedores que funcionan en cada establecimiento educativo habían dejado de dar alimento a miles de niños indigentes.

La crisis en la crisis, como se dio en llamar, se manifestó a través de episodios de violencia social de distinta naturaleza, algunos de corte anómico, de estilo explosivo sin rumbo, otros previamente organizados y manipulados y, por último, la violencia como protesta social anti-partidos políticos, que podríamos denominar de nuevo tipo de los últimos 30 años. El 15 de diciembre, en el interior del país, comenzaron los primeros saqueos, despojos a los supermercados, muchas veces espontáneos y otras orquestados por operadores de diversas fuerzas políticas. El 18 de diciembre se produjeron intentos de saqueos en el Gran Buenos Aires, lo cual provocó la preocupación del gobierno nacional que intentó distribuir alimentos en algunas zonas carenciadas. Pero el 19 de diciembre el descontrol fue general, desde la mañana los saqueos se

sucedieron en todos los puntos del país, mientras el presidente De la Rúa era convocado por el Episcopado de la Iglesia Católica para lograr un acuerdo de unidad nacional que permitiera reencauzar la gobernabilidad (acuerdo que por otra parte nunca fue firmado). El presidente de la Nación se tornó una figura autista, que no atinaba ya a resolver el menor de los conflictos.

Frente a este panorama caótico, el gobierno decidió disponer el estado de sitio sin el aval del Congreso liderado por el peronismo, que por estas horas prefería dejar caer solo al presidente antes que intervenir y asumir los futuros costos políticos de semejante situación. A través de un mensaje transmitido en cadena nacional, el presidente De la Rúa dio a conocer el estado de sitio ante una ciudadanía que esperaba algún tipo de reacción más importante del señor presidente. Como efecto inmediato, sobre todo en Capital Federal, comenzaron los “cacerolazos”: grupos de individuos, preferentemente de la clase media, que se asociaban espontáneamente al batir de cacerolas y todo tipo de utensilios domésticos y que clamaban por la renuncia del ministro Cavallo y por el fin del estado de sitio. Ante la movilización espontánea de miles y miles de personas, que se agruparon alrededor de la Plaza de Mayo, el gobierno decidió la salida del ministro y la represión policial de la protesta. Al día siguiente, la movilización no se había interrumpido y miles de personas que todavía se encontraban en Plaza de Mayo pedían la renuncia del presidente de la Nación. Como respuesta, el gobierno ordenó más represión, que costó la vida de cinco manifestantes, que se sumaban a los veintiséis muertos en el interior del país. Aislado en la Casa Rosada y también del resto del sistema político, con muertos en las calles, el presidente De la Rúa presentó la renuncia.

Las interpretaciones posteriores sobre el estallido suelen ubicar la causa en uno o dos de los acontecimientos aquí destacados. Si a primera vista la renuncia parece provocada por la falta de reacción política frente a la gravedad de la situación social, económica y política, también parece haber sido consecuencia de un golpe institucional producido por sectores del justicialismo, caudillos bonaerenses e intendentes del Gran Buenos Aires, montándose en necesidades urgentes de sectores sociales desprotegidos. Tampoco parece clara, vista a la distancia, la dureza de la represión desatada por las fuerzas policiales, qué significado tuvo, cómo se decidió el estado de sitio. Sospechamos que ciertos sectores empresariales vinculados a las grandes cadenas de supermercados reaccionaron frente al caos social que los efectos de sus políticas generaron en relación a sus alianzas con el Estado y participaron en la convocatoria del estado de sitio. Sin embargo, tanto los sectores empresariales concentrados como las fuerzas de la represión no tuvieron en cuenta que esta medida iba a constituir el detonante para que la clase media saliera a la calle y se expresara mediante cacerolazos, acontecimiento que se produjo luego de

un discurso presidencial que parecía no tomar conciencia de la gravedad de la situación social. Se suele indicar que los cacerolazos fueron producto de una clase media estafada por el Estado o el sistema financiero o que los saqueos fueron promovidos por sectores del peronismo que como querían desalojar rápidamente del poder al gobierno aliancista. Si bien estas afirmaciones no son erróneas, ellas no llegan a explicar por sí solas las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Es el conjunto de fenómenos simultáneos y conectados entre sí que se sucedieron desde julio a diciembre de 2001 lo que puede darnos una explicación más acabada del estallido social. Estos fenómenos en particular no representan las causas estructurales de la crisis sino algunos de los acontecimientos coyunturales, que ocurridos en un breve lapso, impulsaron el descontento y la protesta (Cuadros 11 y 12). Según se puede apreciar en nuestra encuesta y en el cuadro expuesto, la adhesión a la protesta aumenta según el nivel socioeconómico y el nivel educativo de la población. Compartimos con Fradkin (2002: 52) que en la crisis final del gobierno De la Rúa-Cavallo y del régimen de convertibilidad mucho tuvo que ver –alguna vez sabremos cuánto– la postura de la administración Bush y el FMI, que claramente decidieron dejarlos caer²³. En el lapso de dos semanas hubo una sucesión de tres presidentes, quedando finalmente en el cargo Eduardo Duhalde, quien había perdido las elecciones presidenciales de 1999. Podemos concluir con este capítulo que lo que definió la política a lo largo del año 2002 fue la puja partidaria al interior del peronismo.

LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA, LAS ASAMBLEAS, ¿NUEVAS FORMAS DE PROTESTA SOCIAL?

Ya comenzado el mes de enero de 2002, después de haber pasado un 31 de diciembre casi sin presidente, el país pareció gobernado por cacerolazos y asambleas: un profundo descontento social seguía atravesando la sociedad argentina. “Que se vayan todos” era la consigna central de los días siguientes en casi todas las movilizaciones (Cuadros 13 y 14), que fue objeto de debates discursivos y políticos, en un año atravesado por un profundo desconcierto y una grave crisis de representación política. El nivel de hartazgo de la sociedad argentina era tal que nada podía ser pensado más allá de dicha consigna. Según una encuesta realizada por Daniel Lutzky en la primera semana de enero de 2002, la crisis de representatividad política se pone en evidencia en la adjudicación de la culpabilidad de la crisis argentina a todos los políticos.

23 Como muestra vale que en la primera quincena de diciembre la Argentina efectuó pagos de la deuda por más de 700 millones de dólares apelando a las ya famélicas reservas, pero ni aun así el FMI libró la modesta cuota de un préstamo por poco más de 1.200 millones, precipitando la cesación de pagos.

Todos los políticos	97,4%
La Alianza	5,4%
Las grandes empresas	93,1%
Todos los argentinos	80,1%

Las formas emergentes de organización y movilización social, como las asambleas que se formaron en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, parecían continuar el espíritu manifestado por la ciudadanía con el “voto bronca” dos meses antes. Lo que es evidente en esta coyuntura es la crisis casi absoluta de la clase política como depositaria de la confianza de quienes la sostienen como los representantes del pueblo, pero a diferencia de como se leyó en octubre de 2001, estas nuevas formas de acción colectiva expresan nuevas formas de asumir lo político y una búsqueda de otras formas de representación política que no den lugar a la corrupción y a la falta de justicia (Cuadro 15).

Si la reivindicación de la política y de la democracia fue central en el momento de la transición a la democracia –un indicador del gran interés por la política fue el alto porcentaje de afiliación a los dos partidos mayoritarios–, a partir de la primera crisis institucional de Alfonsín la participación política y social fue disminuyendo paulatinamente. Por otra parte, a pesar de que hubo más tarde un reflujó en la participación en la actividad partidaria, esta siempre se manifestó en el alto porcentaje de asistencia de la población al acto electoral. ¿Qué significaron esos cacerolazos y los siguientes? ¿Una forma de descarga, una salida del letargo, una búsqueda política, una defensa de la identidad de los sectores medios frente al ajuste o todo eso junto? ¿Cómo pueden articularse estas nuevas prácticas asociativas y de hacer política con los resultados de las encuestas sobre interés por la política?

Según una encuesta de Gallup del mes junio de 2002, especial para *La Nación*²⁴, la mayoría de los argentinos se define como políticamente independiente y siente un alto grado de preocupación por quién será el próximo presidente del país. En este escenario, los dirigentes políticos mejor ubicados para las próximas elecciones son Elisa Carrió, titular de Alternativa para una República de Iguales (ARI), Carlos Reutemann, gobernador peronista de la provincia de Santa Fe, y Adolfo Rodríguez Saá, ex gobernador de San Luis (PJ). El 87% de los consultados afirmó que no se siente representado por ningún partido o agrupación política y el 84% dijo lo mismo sobre los políticos actuales. Al preguntárseles cómo se definían políticamente, el 52% se consideró independiente. Entre aquellos con identificación partidaria, el 23% dijo ser peronista, el 6% radical, el

24 La encuesta de Gallup fue realizada entre el 20 y el 24 de junio en 26 localidades del país. Consistió en entrevistas personales y domiciliarias a 1.251 personas mayores de 17 años.

11% se dividió entre liberales, socialistas y otras denominaciones, y el 8% no contestó. La falta de identificación política no significa, como podría pensarse, desinterés en los temas centrales de la política argentina. Por el contrario: 8 de cada 10 entrevistados dijo que le importa mucho o bastante quién será el próximo presidente. Sólo el 16% afirmó que no le importa o le preocupa muy poco. Gallup no midió intención de voto para presidente porque no está aún definido quiénes serán los candidatos. En cambio, elaboró una lista de doce dirigentes políticos que pueden ser candidatos presidenciales y preguntó si el encuestado podría votarlo o si nunca lo haría. Carrió, quien lidera el espacio de centroizquierda, fue la más favorecida: el 48% dijo que podría votarla, mientras que un porcentaje idéntico aseguró que no lo haría. El segundo en el ranking fue el gobernador Reutemann: el 44% aceptaría votarlo, contra un porcentaje superior al 52% que no lo haría. También Rodríguez Saá obtuvo mayor rechazo que adhesión: el 42% sostuvo que podría votarlo, pero el 54% dijo que nunca lo haría. Los restantes puestos eran para Mauricio Macri, empresario, presidente del club de fútbol Boca Juniors y con aspiraciones a participar en política, con 30% de adhesiones; el resto de los políticos no tenía más del 20%. Gallup midió la imagen de esos dirigentes y Carrió y Reutemann resultaron empatados. Obtuvieron una imagen positiva del 33% y una imagen negativa del 31%. Carrió posee una imagen regular del 20%, y Reutemann, del 21. Por debajo, Rodríguez Saá reunió un 30% de opiniones favorables contra el 20% de regulares y el 39% de negativas. En cuanto a los demás, los porcentajes de imagen positiva fueron: Zamora, 23%; Macri, 21%; Kirchner, 16%; Bullrich, 14%; De la Sota, 14%; Menem, 13%; López Murphy, 12%; Ruckauf, 11%, y los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, 11 y 6%, respectivamente. Además, el 78% apoya la decisión de que las elecciones internas de los partidos políticos sean abiertas, es decir que todos –no sólo los afiliados– puedan elegir el candidato presidencial. Sólo el 12% se opone.

Dar cuenta de la magnitud de transformación del vínculo de los argentinos con la política supone abordar un aspecto significativo de las representaciones sociales de esta sociedad, dado el importante lugar que ocupó la política en la vida cotidiana de las relaciones familiares, de las amistades barriales y laborales. Este vínculo se ha roto definitivamente, produciéndose un fenómeno similar al que ocurre en sociedades más desarrolladas: cierto desinterés por la política o la sensación de que la política está muy lejos de las angustias y urgencias de la vida cotidiana y que poco puede hacer frente al poder. Teniendo esta hipótesis como telón de fondo, vamos a analizar tanto la escena mediática como los imaginarios de los sectores medios castigados por el ajuste, los cuales constituyen el foco del trabajo de campo cualitativo.